

Salamanca, Guanajuato, a 01 primero de octubre de 2020 dos mil veinte, encontrándose debidamente integrado el expediente **JAM-02/2020**, promovido por **XXXXXX**, por su propio derecho, en los siguientes términos;

RESULTANDO

PRIMERO. Promoción de la demanda. Por escrito presentado ante este Juzgado Administrativo Municipal el 11 once de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, suscrito por quien se indica en el proemio de la presente resolución, impugnando los siguientes actos administrativos:

- I.** La boleta de infracción con número de folio XXXXX, la cual le fue notificada el 24 veinticuatro de noviembre de 2019 dos mil diecinueve.
- II.** Y su subsecuente calificación de fecha 25 veinticinco de noviembre de 2019 dos mil diecinueve.

Además, solicito a) La declaración de nulidad de dicho acto, b) El reconocimiento de un derecho para que se deje sin efectos la boleta de infracción y se devuelva la cantidad que tuvo que erogar con motivo de un acto administrativo que a su juicio resulta ilegal, y la abstención a la inscripción de cualquier registro negativo, eliminación o cancelación c) La condena a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de los derechos violentados.

SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de fecha de 09 nueve de enero de 2020 dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y se emplazó a las autoridades demandadas para que dieran contestación de la demanda entablada en su contra. Así mismo se solicitó copia certificada de la boleta de infracción con fundamento en el artículo 50 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato.

Además, se solicitó a la Coordinación de Oficiales Calificadores para que en el término de tres días se informe el nombre del servidor público quien calificó la boleta de infracción y pudiera ser emplazado legalmente.

Por otra parte, en cuanto a las pruebas ofrecidas por el accionante mencionando el recibo de pago original con folio XXXXXX de fecha 25 veinticinco de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, se le requiere a la parte actora para que en el término de 05 cinco días proporcione dicha factura. Lo anterior con fundamento en los artículos 266 fracción V y 267 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Requiriendo además a la Tesorería Municipal para que en el término de 15 días exhiba ante este Juzgado Administrativo documento original y/o copia certificada de la factura señalada en supralíneas. Esto con fundamento en el artículo 50 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato.

Además, con fundamento en el artículo 283 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato se ordenó correr traslado de la demanda a Tesorería Municipal de Salamanca, Guanajuato en su calidad de Tercero con un derecho incompatible a la pretensión del actor, para que comparezca al presente proceso.

TERCERO. Contestación de la demanda. Por auto de fecha 19 diecinueve de febrero de 2020 dos mil veinte, se tuvo al Director General de Movilidad de Salamanca, Guanajuato, por dando cumplimiento a requerimiento de fecha 09 nueve de enero de 2020 dos mil veinte, en el que presentó copia certificada de la boleta de infracción. Se tuvo a la Coordinación de Oficiales Calificadores por proporcionando nombre del Servidor Público que calificó el acto por lo que se le emplazó para que diera contestación a la demanda entablada en su contra.

En cuando a el agente vial, se le tuvo por dando contestación a la demanda entablada en su contra en tiempo y forma, señalando domicilio procesal para oír y recibir toda clase de notificaciones, así como autorizados legales para recibir toda clase de documentos y aportando pruebas que acrediten su personalidad.

Así mismo se tuvo al tercero con un derecho incompatible al del actor por compareciendo al presente proceso, así como señalando domicilio procesal, señalando autorizados y por haciendo manifestaciones.

Además, se le tuvo por objetando los documentos que alude en su escrito, lo anterior con fundamento en el artículo 86 del código multicitado.

En auto de fecha 18 de marzo de 2020 se tuvo a el Oficial Calificador por contestando en tiempo y forma la demanda entablada en su contra, señalando domicilio procesal, así como autorizados legales para recibir toda clase de notificaciones.

En auto de fecha 29 veintinueve de abril de 2020 dos mil veinte, se tuvo a bien regularizar el presente proceso, toda vez que, los alegatos se habían señalado en fecha 20 veinte de abril de 2020 dos mil veinte, sin embargo, tuvimos que declarar inhábil dicha audiencia y señalar otra fecha posteriormente. Debido a que se declararon inhábiles esos días debido a la contingencia sanitaria derivado del COVID-19. Lo anterior con fundamento en el artículo 8 fracción X y artículo 20 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Finalmente, en auto de fecha 16 dieciséis de julio de 2020 dos mil veinte se señaló fecha y hora para el desahogo de audiencia de alegatos.

CUARTO. Audiencia final del proceso. Legalmente citadas las partes, siendo las 12:00 doce horas con cero minutos de 24 veinticuatro de julio de 2020 dos mil veinte, ninguna de las partes presento alegatos.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Este juzgado Administrativo Municipal con sede en Salamanca, Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente proceso, de conformidad con los artículos 1, fracción II y 263 párrafo primero del Código de Justicia Administrativa de Guanajuato; así como lo previsto por los artículos 241, 243 segundo párrafo, 244 y 246, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

SEGUNDO. Certeza del acto impugnado. La existencia se tiene por acreditado con copia certificada de la boleta de infracción con número de folio 9930 –foja 19-, emitida el 24 veinticuatro de noviembre de 2019 dos mil diecinueve misma que se solicitó con fundamento en el artículo 50 del Código multicitado. Adminiculada con la confesión realizada por la autoridad encausada al momento de contestar la demanda en cuanto expreso que era cierto la elaboración de la infracción impugnada.

Esta valoración se fundamenta en los artículos 48 fracción I, 57,117,118, y 124 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En cuanto a la calificación no se tiene por acreditada dentro de este expediente. Pues no se exhibió documento que comprobara dicho pago, por concepto de multa.

TERCERO. Las causales de improcedencia y sobreseimiento. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y, por tanto, de estudio oficioso y preferente.

En esa tesitura se analizará la que hacen valer la autoridad demanda y el tercero con un derecho incompatible al del actor, quienes en síntesis expresan lo siguiente:

“...opongo la excepción de falta de agravio personal y directo en la esfera jurídica del demandante...”

En cuanto a la falta de interés jurídico del actor lo expuesto por las autoridades demandada y el tercero en el proceso resulta infundado atento a las siguientes consideraciones. Del folio de infracción XXXXX se desprende que el agente vial en el rubro del conductor asentó de manera literal al igual “XXXXXXXXX” (sic).

Ante tal indeterminación del sujeto al cual se dirige el acto impugnado, es la misma que hoy acude ante este órgano de control jurisdiccional a demandar su nulidad.

Entonces, si **XXXXXXX**, acude a promover el presente proceso como afectado por la imposición de la boleta de infracción, al presentar la autoridad en la boleta de infracción en copia certificada misma que da fe de la existencia del original, su interés jurídico lo acredita con la propia boleta de infracción.

Esta valoración se fundamenta en los artículos 117, 121 y 131 del *Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato*.

Resulta aplicable a lo anterior, la siguiente tesis aislada, que se aplica por analogía y que fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y que a la letra establece:

<<INTERES JURIDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia.>>

Por otro lado, en cuanto al señalamiento que hace la autoridad respecto de la legalidad de su actuación y su percepción acerca de que por ello este proceso es improcedente, debe señalarse que la materia de controversia en este caso es precisamente la definición de la legalidad del acto combatido, razón por la que no puede traducirse en una causa de improcedencia o de sobreseimiento establecidas en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues sus consideraciones se refieren a la legalidad del acto impugnado.

Dicho de otro modo, las alegaciones de la autoridad se refieren al estudio de la cuestión de fondo del asunto, razón por la que sus planteamientos no constituyen una de las causas antes señaladas y, por ende, es preciso desestimar su estudio en este apartado.

Por lo anteriormente expuesto y al no actualizarse alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 261, en relación con el 262, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios del Guanajuato, **NO SE SOBRESEE EL PRESENTE PROCESO ADMINISTRATIVO.**

CUARTO. Se precisa a las partes que no se transcribirán íntegramente el concepto de impugnación expuesto por el accionante, ni los argumentos esgrimidos por la autoridad demandada. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a. /J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XXXI, de mayo de 2010 dos mil diez, consultable a página 830, que es del tenor literal siguiente:

«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la Litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer».

QUINTO. En el concepto de impugnación donde se señala por la parte actora la competencia de la autoridad demandada cabe a bien señalar la siguiente jurisprudencia número XVI.1º.A.T.J/11, sustentada Por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XXIX, de junio de 2009 dos mil nueve, consultable a página 878, que es del tenor literal siguiente:

<<COMPETENCIA. LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN LA SENTENCIA, ES INDICATIVO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONSIDERÓ OFICIOSAMENTE QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA ES COMPETENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL OCHO).El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, al analizar de oficio la competencia de la autoridad demandada, no se encuentra obligado a realizar un pronunciamiento expreso en la sentencia, cuando considera que la autoridad es competente, pues si bien, de conformidad con el artículo 302, fracción I y último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el juzgador podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la falta de competencia de la autoridad para dictar el acto impugnado y la ausencia total de fundamentación o motivación en éste, ello no significa que el órgano jurisdiccional se encuentre facultado discrecionalmente para examinar ese tema cuando lo considere conveniente, pues la connotación sobre la importancia del aspecto de la "competencia" que se reconoce de ese estudio, orientan la conclusión de que el uso que le procuró el legislador al incluir el verbo "podrá", no es para identificar una facultad potestativa, sino una obligación para el resolutor de que siempre y en todos los casos se pondere la competencia de la autoridad que emite el acto o instruye el procedimiento porque es un aspecto que interesa a la comunidad. De ahí que, en el supuesto de que el citado tribunal, al analizar oficiosamente la competencia de la autoridad administrativa considere que es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada; empero, si estima que es competente, no se encuentra obligado a plasmar esa consideración en la sentencia que emita, pues esa falta de pronunciamiento es indicativo de que el juzgador asumió que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad, lo que se corrobora con la circunstancia de que continuó con el análisis de la procedencia del juicio y en su caso, entró al estudio de fondo de la controversia. >>

Quien resuelve considera **fundado** el **único** concepto de impugnación en donde la parte actora argumenta que el folio de infracción 9930, se emitió sin contener una debida fundamentación y motivación de conformidad con los siguientes razonamientos jurídico:

El artículo 137, fracción VI del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipio de Guanajuato, señala como elementos de validez del acto administrativo, la debida fundamentación y motivación.

En ese orden de ideas, tratándose de una boleta de infracción en materia de vialidad, la fundamentación debe traducirse en el señalamiento preciso de los preceptos legales aplicables al caso, mientras que, por motivar, debe entenderse como el señalamiento preciso y detallado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el razonamiento jurídico donde se explique por qué esos hechos actualizan la hipótesis contenida en el Reglamento de Vialidad para el Municipio de Salamanca, Guanajuato.

Sirve de sustento al argumento vertido supralíneas, la siguiente Jurisprudencia, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, página 622, Tesis No. VI. 2º. J/31, que a la letra dice:

<<FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. >

En la especie, la autoridad demandada asentó dentro del acto impugnado el fundamento y motivo limitándose a señalar con una marca en pluma negra en la parte impresa siguiente:

“MOTIVO DE LA INFRACCION

“Conducir vehículos automotores en estado de ebriedad Artículo 27 RVMS inciso E”

Citando como fundamento legal de la falta administrativa imputada el artículo 27 inciso E, 26 y 28 así como el artículo 18 fracción XVIII Y articulo 26 y 28

del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Salamanca, Guanajuato que a la letra dice:

>>**Artículo 27.-** De conformidad al Programa Nacional de Alcoholimetría que mide la cantidad de alcohol presente en el aliento y conforme al Proyecto de Norma

Mexicana PROY-NMX-CH-153-IMNC-2005, se entenderá en el presente Reglamento, la unidad de medición en mg/L (miligramos de etanol por litro de aliento espirado), como la Unidad de medida: 0.0 mg/L.

Para efectos de este Reglamento se considera que una persona se encuentra en estado de ebriedad, cuando registre una cantidad de alcohol superior a 0.39 miligramos por litro de aire espirado, según sensor del alcoholímetro; considerando para lo anterior los siguientes parámetros:

e). Estado de ebriedad Grado III De 0.80 en adelante. <<

Lo anterior, si bien es cierto que señalo con un “X” como fundamento los articulo antes mencionados que establecen la obligación de todo usuario respetar la señalética así como el evitar conducir en estado de ebriedad, sin embargo la autoridad demandada señalo en **“Circunstancias de Tiempo modo y lugar”** lo siguiente: “Siendo las 23:02 hrs del día de hoy cabina de radio 911 ordeno que pasara a la calle romita entre calles Comonfort y valle de Santiago y que en el lugar se había suscitado un hecho de tránsito, siendo vehículo el hecho encontrándose en el lugar vehículo ya descrito al reverso de esto boleta y entrevistándome con el conductor el cual desprendió aliento alcohólico motivo por el cual se trasladó a los separos preventivos donde fue certificado por el técnico en urgencias (ilegible) que le diagnostico estado de ebriedad grado III con el diagnóstico del médico 1.44” (sic).

Sin embargo no expone los motivos por los cuales se consideró al actor como infractor de tal disposición, pues no se señalaron las causas específicas que dieron origen a tal consideración, esto es, no da las características específicas de cómo se dieron los hechos de manera pormenorizada sujetándose al procedimiento que se marca en el artículo 28 del Reglamento de Vialidad de Salamanca, Guanajuato, además de identificar el aparato con el que se realizó dicha prueba y con el cual se determinó el grado de alcohol que se señaló además de señalar como fue que se percató de que dicha persona se encontraba en estado de ebriedad y cómo fue que detuvo el vehículo.

En cuanto a la motivación que señala la autoridad demandada en donde señala que se pasó varios semáforos en luz roja se encuentra indebidamente fundamentado ya que el artículo 58 así como el 27 se refieren a dos situaciones distintas pues el artículo al que se refiere tal hecho es el 60 fracción III inciso A, del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Salamanca, Guanajuato

En efecto, correspondía a la demandada indicar mediante un relato pormenorizado de cómo ocurrieron los hechos, para acreditar en el texto mismo del acto controvertido, cómo se percató que el hoy actor cometió la supuesta infracción al Reglamento de Vialidad para el municipio de Salamanca, Guanajuato.

Lo anterior de conformidad al criterio Jurisprudencial sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, y que es del tenor literal siguiente:

«FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de /autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo/ primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.». (Octava Época, Registro: 216534, Instancia: Tribunales

Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 64, Abril de 1993, Materia(s): Administrativa, Tesis: VI. 2o. J/248, Página: 43.).

En estos términos, para que la motivación sea suficiente y congruente, es necesario que en el propio cuerpo de la infracción se señalen en forma completa, las razones que sustenten su dicho y de las que pueda acreditarse la comisión de la totalidad de conductas imputadas. Se concluye por ello, que la motivación empleada, resulta insuficiente.

Por todo lo anterior, para efecto de que pudiera subsistir la presunción de legalidad de la que se encuentran investidos los actos administrativos, resulta necesario que la autoridad sujete su actuar a las formalidades contenidas en el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; para el presente asunto, particularmente haber motivado en forma suficiente, la totalidad de las circunstancias que acreditaran fehacientemente la comisión de las conductas imputadas.

A mayor abundamiento, cabe puntualizar que la fundamentación y motivación de la boleta de infracción debe contener, como se esclareció supralíneas, los siguientes elementos: a) preceptos legales aplicables; b) relato pormenorizado de los hechos, incluyendo elementos temporales, espaciales y circunstanciales; y, c) argumentación lógica jurídica que explique con claridad la razón por la cual los preceptos de ley tienen aplicación al caso concreto.

Lo anterior así se sostiene, pues limitarse a realizar las anotaciones como las que invoco la autoridad, sin una debida fundamentación y motivación, puede dar como resultado que un agente vial arbitrariamente elabore infracciones imponerle la carga de efectuar un pago injustamente habría tenido que soportar, así como imputarle cualquier conducta sin detallar el sustento jurídico en que soporte su decisión.

No es óbice para arribar a esta conclusión el hecho de que la autoridad demandada al momento de su contestación en lo medular negó que la boleta de infracción encontrara indebidamente fundada y motivada; y refiere que existe una contradicción entre lo señalado por el actor y el material probatorio, a su juicio existen elementos tendientes a evidenciar la legalidad de la conducta reprochada y que la negación lisa y llana hecha por el recurrente debe considerarse como calificada.

El argumento sostenido por la autoridad en cuanto a que nos encontramos en presencia de una negación que envuelve una afirmación **es infundado** atento a lo siguiente:

a) El artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que los actos administrativos se presumirán legales, sin embargo, las autoridades administrativas deberán probar los hechos en que los motiven cuando **el interesado los niegue lisa y llanamente**, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.

b) Dentro del escrito de demanda <<foja 07>> capítulo de conceptos de impugnación, el justiciable de una forma clara y sin cortapisas negó lisa y llanamente, por lo que, la presunción de legalidad del acto deja de operar revirtiendo a de esta manera a la demandada la carga de la prueba a fin de demostrar la existencia de los hechos y, por tanto, **la legalidad del acto administrativo**, situación que dentro del presente proceso no se acredita, pues del análisis de la boleta de infracción resulta indebidamente fundada y motivada atento a los argumentos antes expuestos es esta resolución.

Es importante señalar que dentro del presente proceso administrativo se ventila sobre la legalidad o ilegalidad del folio de infracción 9930 de esta maneta por regla general le corresponde a la autoridad emisora del acto impugnado acreditar que el mismo cumplía con todos los elementos y requisitos de validez regulados por los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el estado y los Municipios de Guanajuato.

Bajo ese contexto, la omisión o irregularidad de alguno de los elementos de validez trae como sanción la nulidad del acto administrativo, mismo que no podrá ser remplazado por otro, tampoco subsanarse y por tanto, el impetrante no tiene la obligación de cumplirlo.

En consecuencia, los agravios esgrimidos por el actor resultan fundados referente a la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, en atención a que es en el propio acto donde de forma completa deban señalarse el ordenamiento legal aplicable y las razones y circunstancias pormenorizadas bajo las cuales se cometió una falta administrativa, lo anterior con fundamento en la fracción VI del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Como apoyo de lo anterior, se hace propio, el criterio que sostiene la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, contenida en la página 119 ciento diecinueve, de la publicación intitulada “Criterios 2000-2008” del referido Tribunal, la cual es del tenor siguiente:

“INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- PROCEDE DECRETAR LA NULIDAD LISA Y LLANA.- La ausencia de fundamentación y motivación deriva en el decretamiento de una nulidad para el efecto de que se emita otro acto debidamente Fundado y motivado. Por su parte la indebida satisfacción de estos extremos, conduce a decretar una nulidad lisa y llana, ya que aquí el particular no requiere conocer los fundamentos y motivos de la afectación, sino que es sabedor de que los aplicados en el acto en concreto no son los adecuados.¹”

En las relatadas circunstancias, es de concluirse que del contenido del acto combatido no se advierten elementos suficientes que demuestren que el hoy actor haya infringido algún ordenamiento legal.

Lo anterior encuentra sustento legal en la siguiente tesis:

“TRANSITO, MULTAS DE. Una infracción y una multa impuestas por el agente de tránsito como parte, testigo y Juez, en cuya acta se limita a asentar escuetamente "pasar alto con señal de semáforo", carece de motivación en realidad, pues por una parte no explica en forma clara y completa las circunstancias de la infracción y, por otra, sería una denegación de justicia y una renuncia al debido proceso legal, contra el texto de los artículos 14 y 16 constitucionales, obligar a un particular a pagar sin más una multa cuya motivación no es clara y en la que, como se dijo, el agente fue parte, testigo y Juez, sin que su dicho admita prueba eficaz y real (no simplemente teórica) en contrario.²”

Por las consideraciones vertidas, con fundamento en los artículos 143 párrafo primero, 300 fracción II y 302 fracciones II y IV, del multicitado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo procedente decretar la **NULIDAD TOTA** del acto impugnado consistente en boleta de infracción XXXX elaborada por

¹(Exp. 4.509/02. Sentencia de fecha 09 nueve de mayo de 2003. Actor: Martha Isabel Espriu Manrique)

²Tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 121-126, Sexta Parte, página 233. Con registro número 252071

Pedro Martínez Rubio, adscrito a la Dirección de Vialidad de Salamanca, Guanajuato.

Esta determinación se sustenta en el artículo 300 fracción II del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 121-126 sexta parte; pagina 280, Séptima Época, con registro número 252103, que esta establece:

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.” - -

SEXTO. Dentro del escrito inicial de demanda el ahora actor solicito como reconocimiento de derecho lo siguiente:

- a)** el reconocimiento de derecho para que le sea devuelta la cantidad de **\$7,435.00 (siete mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional)** que erogo por concepto de la multa que aparejo el acto impugnado.
- b)** el derecho para que la autoridad se abstenga de hacer cualquier tipo de registro de carácter negativo o perjudicial, o bien si ya se realizó se proceda a su cancelación dentro del libro de sanciones administrativas del municipio de Salamanca, Guanajuato, así como la condena a la autoridad encausada para adoptar las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de los derechos violentados.

En cuanto al inciso a) el actor no acredito el pago de la multa no aportando al sumario ejemplar original consistente en comprobante fiscal, pues en auto de fecha 09 nueve de enero de 2020 dos mil veinte, se le requirió para que presentara dicha documentación, sin embargo, fue omiso en presentarlo. Por lo que **no se reconoce el derecho** para que le sea devuelta la cantidad de \$7,435.00 (siete mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100), pues no acredita con documento alguno el pago de esta cantidad. Pues con esto se evita que el actor obtenga un beneficio indebido derivado de que este

Honorable Juzgado Administrativo, ordene la restitución de un derecho que no sea configurado. Pues si bien se reconoce derechos mas no se constituyen.

A mayor abundamiento sirva la siguiente tesis jurisprudencial, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, segunda sala, Tomo XXXI marzo de 2010, número de registro 165079, página 1049.

<<CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA OBLIGACIÓN DE CONSTATAR LA EXISTENCIA DEL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR EN EL JUICIO RELATIVO, OBEDECE AL MODELO DE PLENA JURISDICCIÓN CON QUE CUENTA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y TIENDE A TUTELAR LA JUSTICIA PRONTA Y COMPLETA.El deber del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de reconocer o constatar la existencia del derecho subjetivo del actor en el juicio contencioso administrativo, antes de ordenar que se restituya, se reduzca el importe de una sanción o se condene a una indemnización, contenido en los artículos 50, penúltimo párrafo, y 52, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, está inspirado en la garantía de justicia pronta y completa establecida en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque con ello se intenta evitar que el actor obtenga un beneficio indebido derivado de que el Tribunal ordene la restitución de un derecho que todavía no se ha incorporado a la esfera jurídica de aquél o no ha sido demostrado, pero si acredita en el juicio contencioso que cuenta con él, porque allegó los elementos probatorios suficientes que revelan su existencia, se procura la pronta y completa resolución de lo solicitado en la instancia de origen, ya que el particular no tendrá que esperar a que la autoridad administrativa se pronuncie nuevamente, con el consecuente retraso en la solución final de lo gestionado.>>

Por lo que respecta a la no inscripción y/o cancelación de los antecedentes administrativos, **ha lugar al reconocimiento** del derecho, en atención a los siguientes argumentos:

Toda actuación policial se asienta en documentos oficiales para su debido registro en las plataformas destinado para ellos, tal y como se desprende del artículo 40, fracción IX de la Ley General del Sistema de Seguridad Publica y lo correlativo al numeral 85 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato, que a la letra establecen:

De la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

<< Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables.

De la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato.

Colaboración en materia de registro de antecedentes de +tránsito

Artículo 85. Con la finalidad de contar con información oportuna y suficiente para prevenir accidentes de tránsito, así como para detectar a los infractores reincidentes, la Policía Estatal de Caminos, y los municipios, se apoyarán en el registro estatal de antecedentes de tránsito...>>

Por ende, una vez que ha quedado anulada la boleta de infracción y el total de su contenido, SE RECONOCE EL DERECHO DE LA PARTE ACTORA, a que la autoridad demandada se abstenga de realizar o colaborar en la inscripción de antecedentes de tránsito y en el supuesto de haberse inscrito la sanción materia del presente juicio, PROCEDA A SU CANCELACION TODA VEZ QUE HA QUEDADO ANULADA CON MOTIVO DE LA PRESENTE SENTENCIA.

En esa tesitura y derivado de los argumentos esgrimidos por esta juzgadora, **se condena a la autoridad demandada (agente vial)** a realizar las gestiones necesarias a fin de que realice al actor, la eliminación, cancelación

cualquier registro de carácter negativo con la finalidad de no imponer cargas al actor para el cumplimiento de la presente sentencia.

Debiendo adoptar la autoridad demanda todas las medidas que sean necesarias para el pleno restablecimiento del derecho reconocido, pudiendo auxiliarse de otras autoridades para el cabal cumplimiento de esta sentencia.

En base a lo antes expuesto, la autoridad deberá informar sobre el cumplimiento otorgado al presente considerando, **en un término de quince días hábiles** contados a partir de aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Este Juzgado Administrativo Municipal resulto competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo, atento a lo dispuesto por el considerando primero de esta sentencia.

SEGUNDO. Se declara la **NULIDAD TOTAL** de la boleta de infracción **XXXXX** en términos de los manifestado en el considerando **QUINTO**.

TERCERO. Ha lugar al **RECONOCIMIENTO DEL DERECHO** para que se elimine o cancele cualquier registro de carácter negativo de la parte actora, Y **A LA CONDENA** de las pretensiones declaradas procedentes, en los términos manifestados en el **CONSIDERANDO SEXTO**.

NOTIFÍQUESE. En su oportunidad procesal, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y dese de baja del Libro de Registro de este órgano de control de legalidad.

Así lo resolvió y firma la Licenciada **Estephania Núñez Diosdado**, encargada de despacho del Juzgado Administrativo Municipal de Salamanca, Guanajuato, quien actúa asistido en forma legal con Secretaria de Estudio y Cuenta, Licenciada **Leslie Haydeé Leticia Valadez Dávalos**, quien da fe.